

## Documento de Cooperación Técnica

### I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	REGIONAL
▪ Nombre de la CT:	Clínica de Seguridad Ciudadana y Justicia
▪ Número de CT:	RG-T3627
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Villa Mar, Karelia (IFD/ICS) Líder del Equipo; Alvarado, Nathalie Tatiana (IFD/ICS); Cedillo Lopez, Barbara Paola (IFD/ICS); Manzur Madariaga, Michelle (IFD/ICS); Munguia Aburto, Pavel Roberto (IFD/ICS); Negret Garrido, Cesar Andres (LEG/SGO); Restrepo Restrepo, Andres De Jesus (IFD/ICS)
▪ Taxonomía:	Investigación y Difusión
▪ Operación a la que la CT apoyará:	.
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	20 Mar 2020.
▪ Beneficiario:	Los 26 países miembros prestatarios del BID
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones(INS)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$200,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	1 de agosto de 2020
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	IFD/ICS-División de Innovación para Servir al Ciudadano
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	IFD-Sector de Instituciones Para el Desarrollo
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	N/A
▪ CT incluida en CPD (s/n):	N/A
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Capacidad institucional y estado de derecho

### II. Objetivos y Justificación de la CT

- II.1 Los efectos directos de la pandemia del COVID-19 están causando una crisis en diferentes áreas del ámbito del sector de seguridad y justicia. En específico, se está produciendo una crisis en ámbitos como: la gestión policial; la violencia contra la mujer e intrafamiliar; el acceso a la justicia; y los centros penitenciarios, lo cual ha puesto a este sector como uno de los prioritarios a atender en la actual crisis, considerando el desafío que implica la interconexión entre diferentes actores institucionales, que convergen para responder a las problemáticas precedentes a la pandemia y que se han intensificado y agravados a causa del presente contexto de confinamiento social.
- II.2 En el caso de la Policía, en una situación de crisis sanitaria, además de sus tareas cotidianas de prevención, control e investigación del crimen, tienen que asumir tareas de primera línea para atender estas emergencias. Esto puede representar desafíos significativos a la capacidad de respuesta de la policía para llevar a cabo estas funciones. Además, se suma el desafío de evitar el contagio para muchos agentes de policía en un trabajo que requiere interacción frecuente con el público y por ser los servidores que atienden directamente la labor operativa de controlar las calles. En la región se cuenta con un número importante de policías contagiados por COVID-19,

por ejemplo, en [Perú son 8,310 agentes](#) contagiados y 146 fallecidos; en [Ecuador 767 policías](#) contagiados y 6 fallecidos; en [Ceará, Brasil hay 650](#) policías contagiados y en [Sao Paulo 600 contagios](#); en [Chile se tienen 67 carabineros](#) contagiados; en [Colombia 31 policías](#) contagiados, en [Ciudad de México 56 policías](#) contagiados; en Honduras 49 policías contagiados; en [Argentina 14 efectivos](#) de la policía aeroportuaria de Ezeiza contagiados; en [Uruguay 6 policías](#) contagiados.

- II.3 Referente al problema de violencia contra la mujer e intrafamiliar (VIF), desde el inicio del confinamiento social, los países de América Latina y el Caribe (ALC) han reportado un incremento en las llamadas a las líneas de emergencia. Por ejemplo, según datos recogidos por el BID en distintas fuentes de registros de violencias en la región, se ha tenido un incremento del reporte de denuncia en la mayoría de los países de esta región en promedio de un 50%: en México, la VIF creció en un 120% desde que se anunció la emergencia del Covid-19 a la fecha<sup>1</sup>; en El Salvador, en un 70%<sup>2</sup>; en Guatemala, el incremento registrado a mayo 2020, alcanza el 38%<sup>3</sup>; en Honduras, las llamadas al 911 por VIF se incrementaron 30%. Lo anterior, se agrava en el caso de la violencia intrafamiliar, en perjuicio de niños, niñas y jóvenes que son agredidos, porque existe una alta propensión de subregistro en estos casos, generando una posición de mayor vulnerabilidad para la víctima y un grado de mayor control, poder y agresividad para el abusador.
- II.4 Respecto a la situación de acceso a la justicia, en la región se ha presentado una parálisis y/o retraso en la administración de justicia que ha impedido a los ciudadanos el acceso adecuado a este servicio y a sus propios derechos, afectando el desarrollo de audiencias, causas judiciales y juicios, algunos de los cuales han sido atendidos por jueces de primera línea. Por otro lado, el sector ha incursionado en innovaciones tecnológicas en los últimos años, que le han permitido adaptar herramientas informáticas para el actuar de los jueces, fiscales, abogados, peritos, etc., en tiempos del COVID-19. Algunos ejemplos de esta rápida adecuación en el uso de tecnologías para mejorar el acceso a la justicia se presentan en países como [Chile](#), [Costa Rica](#) y [Ecuador](#), donde se implementaron tele-audiencias<sup>4</sup>.
- II.5 En el caso del sistema penitenciario, la llegada de la pandemia del Covid-19 ha visibilizado y agravado los grandes desafíos que ya enfrentaban los sistemas penitenciarios de la región. Las condiciones prevalentes previo a esta pandemia, mostraban una situación crítica en los sistemas penitenciarios en ALC, con una tasa de encarcelamiento que aumentó a partir del 2004 a la fecha en un 28% en promedio, especialmente entre grupos poblacionales vulnerables como mujeres y jóvenes. Tan sólo la tasa de encarcelamiento de mujeres se incrementó en un 52%. En promedio el 60% de toda la población de privados de libertad en la región son jóvenes menores de 35 años. En 17 de los 26 países de la región que atiende el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la situación de sobrepoblación se considera crítica y en algunos el número de reclusos es más del doble de la capacidad funcional de las prisiones.

---

<sup>1</sup> De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación (basada en llamadas de auxilio reportadas al sistema de atención 911); el 66% se trataría de violencia física y 24% psicológica.

<sup>2</sup> Informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), corte 22 de mayo 2020.

<sup>3</sup> Datos Secretaría de la Mujer del Ministerio Público.

<sup>4</sup> <https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/justicia-y-covid-19-3-formas-de-impartir-justicia-durante-una-pandemia/>.

Aunado a lo anterior, en ALC se aplica excesivamente la prisión preventiva<sup>5</sup>, -cuyo promedio para ALC es hoy del 47%, y en algunos países alcanza hasta del 70%<sup>6</sup>.

- II.6 La sobrepoblación, la falta de higiene y el limitado acceso a los servicios de salud hacen que los centros penitenciarios sean lugares donde las enfermedades infecciosas sean de fácil transmisión y difícil atención, por lo que esta población encarcelada es altamente vulnerable a contagiarse por el COVID-19. En sistemas penitenciarios con buena infraestructura y servicios, se calcula que la tasa de prevalencia de enfermedades contagiosas es 81 veces más alta, que fuera de ellos<sup>7</sup>. Actualmente se calcula que en ALC con base en la información disponible de 15 países, contamos con más de 7,000 personas contagiadas en los sistemas penitenciarios de la región y se registran 237 defunciones. Se calcula que a nivel mundial han muerto [1,115 personas privadas de libertad](#).
- II.7 En este contexto, es importante que el Banco siga generando una plataforma de diálogo temático de alto nivel académico y técnico, que permitiera conocer y escuchar de primera mano las principales preocupaciones de las autoridades de la región en materia de la crisis sanitaria en los aspectos de seguridad y justicia, al mismo tiempo compartir las innovaciones o el conocimiento de vanguardia producido por los diferentes países de la región de ALC. Esta plataforma inició en 2008, con el desarrollo de la primera Clínica de Seguridad Ciudadana<sup>8</sup>, y cuatro años más tarde, estos esfuerzos convergieron con la implementación de la Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia, a la cual se le adicionó el evento llamado Diálogo Regional de Política (DRP), focalizado en contar con un diálogo a nivel de ministros y viceministros del área de seguridad ciudadana y justicia de la región de ALC. Es así como surge la “Semana de la Seguridad Ciudadana y Justicia”, como una plataforma de diálogo y conocimiento única en la región.
- II.8 En términos generales, la Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia está compuesta por dos eventos continuos y complementarios, con características particulares, que han permitido posicionar tanto al BID como a las agencias de seguridad y justicia de los países de la región, obteniendo como resultado la identificación de alianzas y conexiones entre una red de tomadores de decisiones, actores y expertos técnicos relevantes de ALC. En términos específicos, el Diálogo Regional de Política, es un evento cerrado y sólo focalizado en promover el diálogo y reflexiones entre los principales tomadores de decisiones en nuestro sector: Ministros y ViceMinistros de Seguridad y Justicia<sup>9</sup>. Por otra parte, la Clínica de Seguridad Ciudadana tiene la característica de ser un evento abierto al público, y cuenta con

---

<sup>5</sup> Personas privadas de libertad a la espera de recibir una sentencia.

<sup>6</sup> Alvarado, Nathalie y Vélez, Viviana (2019). Dentro de las prisiones de América Latina y el Caribe: Una primera mirada al otro lado de las rejas. BID.

<sup>7</sup> Ariza, Jorge y Ciprián Hernán (2020). COVID-19 Los presos también tosen. Política y Sociedad. Uniandes.

<sup>8</sup> Desde 2008, el BID lleva a cabo las Clínicas de Seguridad Ciudadana, un evento anual que convoca a funcionarios de gobiernos locales y nacionales, académicos, expertos técnicos regionales e internacionales y sociedad civil en general, para discutir y abordar cuestiones apremiantes de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Este evento incluye también visitas de campo para aprender sobre la gestión de las intervenciones. Se han llevado a cabo las Clínicas en Chile 2008, Costa Rica 2009, Uruguay 2010, Brasil 2011, Estados Unidos 2012, México 2014, Ecuador 2015, Argentina 2016, Colombia 2017, Chile 2018 y Estados Unidos 2019.

<sup>9</sup> El DRP cuenta con el financiamiento de una Cooperación Técnica (CT) regional por parte de VPS, para cubrir los costos de la participación de los Ministros de Seguridad y Justicia y es un evento cerrado a la prensa y a otro tipo de público. Este evento cuenta con la participación de aproximadamente entre 100 y 120 personas. Generalmente están participando delegaciones representantes entre 19 a 22 países de ALC.

participante presenciales y virtuales, ya que es un evento que además de llevarse a cabo en un país de la región, se transmite en vivo –livestream- a toda ALC. Cada año cuenta con temáticas que enfatizan aspectos específicos de relevancia en el sector y se identifican a los más destacados académicos, expertos, sociedad civil y especialistas del BID para conversar sobre estas diferentes temáticas en nuestra región. Las Clínicas de Seguridad y Justicia, también se acompañan de visitas de campo, por lo que existe una alta demanda en la región por participar en este evento, porque es una de las únicas experiencias que ofrece la oportunidad de contar con una capacitación de conocimiento aplicado. Por ejemplo, en la Clínica de Seguridad 2019 celebrada en Washington DC, uno de los temas a tratar fueron los desafíos en la modernización tecnológica y académica de personal de seguridad (policías) y justicia (fiscales) en la región y para conocer cómo operan estos procesos de formación y operación de agentes de seguridad y justicia en EE.UU. La Clínica incluyó visitas de campo a: (i) la Academia de formación del FBI en Quántico, Virginia y (ii) al Laboratorio de Ciencias Forenses (FSL) del Distrito de Columbia en Washington, D.C.

- II.9 Como resultado de esta plataforma de diálogo y conocimiento, “La Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia”, el BID se ha posicionado como líder en conocimiento y gestión de seguridad ciudadana y justicia en la región, donde se han apalancado recursos para intervenciones en el sector en diferentes países, se han generado importantes alianzas estratégicas para apalancar operaciones, productos de conocimiento y se han constituido alianzas estratégicas con nuestras contrapartes, instituciones académicas y otros organismos multilaterales<sup>10</sup>. Por ejemplo, en las últimas Clínicas de Seguridad, hemos contado con paneles compuestos por Directores de la Policía de varios países de la región; Fiscales, Directores de Centros Penitenciarios, academia y sociedad civil, tanto de la región, como a nivel internacional. Finalmente, gracias a la concentración de expertos, académicos y conocimiento acumulado sobre políticas públicas comparadas en seguridad y justicia a nivel regional e internacional, las Clínicas de Seguridad nos ha permitido diseñar un curso de capacitación masivo en línea –MOOC- denominado “Líderes para la gestión de la Seguridad Ciudadana y Justicia”. Este MOOC ha sido diseñado en colaboración con el consorcio de universidades de John Jay College, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana –CESC- de la Universidad de Chile y la Universidad de FADISMA de Brasil, e incluye amplio material de conocimiento que ha sido recolectado a través de la implementación de las Clínicas de Seguridad y Justicia durante los últimos años<sup>11</sup>.
- II.10 Es muy importante continuar manteniendo este tipo de plataformas de diálogo sobre políticas públicas de seguridad ciudadana y justicia para ALC, ya que se ha demostrado la utilidad que tienen este tipo de encuentros para catalizar sinergias de colaboración entre el BID y gobiernos de la región; colaboraciones bilaterales entre

<sup>10</sup> De acuerdo con una evaluación independiente se destacó que la Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia, es una actividad altamente valorada por las autoridades de la región dado que se intercambian ideas y prácticas innovadoras y proporciona una valiosa red regional de expertos, para identificar y analizar temas regionales apremiantes y conectar a las partes interesadas, asimismo se destacó su utilidad en el apalancamiento de recursos para operaciones y la catalización en la generación de redes de conocimiento técnico. “Evaluación de la Iniciativa de Seguridad Ciudadana” (Accenture, 2018).

<sup>11</sup> El curso MOOC de Líderes para la Gestión de la Seguridad Ciudadana y Justicia, fue lanzado en 2019 y contó con una participación de aproximadamente 5.600 participantes. Una nueva edición de este curso está programada para el segundo semestre de este 2020, a inscribirse en <https://bddy.me/38lyGDz>. En el siguiente vínculo se comparten testimonios de algunos de los participantes de la primera generación de este MOOC: <https://youtu.be/9KUbkDBDmf4>.

países de la región, alianzas estratégicas para impulsar estudios relevantes y evaluaciones de proyectos emblemáticos con apoyo de la academia; entre otros<sup>12</sup>.

**II.11 Objetivo General.** Fortalecer las capacidades de intercambio de experiencias regionales y facilitar la difusión de conocimiento y lecciones aprendidas en la gestión de la Seguridad Ciudadana y Justicia en los tiempos del COVID-19 entre los Ministerios de Seguridad y Justicia de la región de América Latina, el Caribe y otras regiones en materia de implementación de políticas públicas para la prevención y mitigación de crisis de salud pública y el control del orden público. Lo anterior, permitirá contar con un espacio de intercambio de experiencias regionales y extrarregionales y de conocimiento de alto nivel.

**II.12 Alineación Estratégica.** Esta CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2020-2023 (AB-3190-2), con el desafío de desarrollo de “Capacidad institucional y Estado de derecho”, que propone el fortalecimiento del Estado de Derecho en todos los países de ALC y el conjunto de instituciones responsables de la garantía de derechos y libertades de los ciudadanos, la seguridad y la justicia. También se alinea con la actualización de la Estrategia Institucional con el tema transversal indicado en el documento AB-3190, párrafo 4.20 “Capacidad Institucional y Estado de Derecho”, que promueve mejorar el diseño de políticas y trabajos que puedan ayudar a enfrentar los desafíos de seguridad ciudadana. Así como con el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-7), el cual establece en el párrafo 4.10 que el apoyo del BID en las áreas estratégicas en el sector de seguridad y justicia, tales como: (i) acciones de prevención; (ii) reforzar la capacidad institucional; y en los párrafos 4.18 y 4.19 con la generación de conocimiento y cooperación Sur-Sur y Norte-Sur. Adicionalmente, se alinea con el “Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones (INS)” (GN-2933-5), específicamente con el tema transversal de capacidad institucional y estado de derecho, el cual incluye el fortalecimiento institucional para mejorar la prestación de los servicios públicos, facilitar sólidos entornos de negocios y enfrentar los desafíos de seguridad ciudadana. Finalmente, se alinea con el documento de Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS) (GN-2819-1), el cual contempla apoyar actividades para contribuir al desarrollo de instituciones y reforzar la seguridad ciudadana.

### **III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto**

**III.1 Componente 1. Preparación de una sistematización para identificar buenas prácticas en la prevención y mitigación de los efectos de la pandemia del COVID-19 desde el ámbito de seguridad y justicia en la región de ALC (US\$110.000).** El objetivo de este componente es generar una sistematización identificando buenas prácticas para presentar en la Clínica de Seguridad Ciudadana y Justicia<sup>13</sup> 2020. Esta sistematización contribuirá a responder interrogantes de gran

---

<sup>12</sup> En 2019, la Clínica de Seguridad y Justicia, contó con más de 400 participantes de manera presencial. Este evento fue cubierto por 10 medios de comunicación en países de ALC y en España. Durante el evento, se tuvieron múltiples interacciones entre los usuarios (esto representó un 1,200% más de interacción que una semana estándar y se sumaron 200 seguidores adicionales a nuestras redes sociales). También hubo un aumento del 30% en la tasa de lectura del blog de seguridad ciudadana [Sin Miedos](#).

<sup>13</sup> De acuerdo con la “Evaluación externa de la Iniciativa de Seguridad Ciudadana realizada por Accenture, 2018, constató que la Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia es una actividad altamente valorada por las autoridades de la región dado que se intercambian ideas y prácticas innovadoras y proporciona

relevancia en la gestión de la seguridad ciudadana y justicia en el marco del COVID-19, por ejemplo: ¿Cómo podemos preparar mejor al recurso humano policial y penitenciario para gestionar su autoprotección y la prevención y mitigación de contagios masivos? ¿Cuáles intervenciones han sido promisorias para mantener el orden público? ¿Qué tipo de innovaciones tecnológicas han sido implementadas en la policía y sistema penitenciario para atender la crisis? ¿Qué ha funcionado en la región para prevenir y controlar la violencia contra la mujer, desde el abordaje policial y acceso de la justicia? ¿Cuáles medidas alternativas se han implementado para descongestionar las cárceles? El componente financiará: (i) una sistematización que recopile las mejores prácticas para responder estas interrogantes; y (ii) la edición, puesta en maqueta y publicación de esta sistematización.

III.2 Como resultado de esta intervención, se espera generar conocimiento sobre las lecciones aprendidas que se estén teniendo en la región de ALC para manejar la crisis de la pandemia del COVID-19 en el ámbito de seguridad y justicia, incluyendo soluciones que atiendan las necesidades de los países.

III.3 **Componente 2. Difusión de conocimiento de experiencias en seguridad ciudadana y justicia en el marco de la pandemia COVID-19 (US\$90.000).** El objetivo de este componente es contar con un espacio de intercambio de experiencias de conocimiento y lecciones aprendidas en la gestión de crisis sanitarias desde el sector de seguridad ciudadana y justicia a través de la Clínica de Seguridad Ciudadana y Justicia 2020, entre tomadores de decisiones, académicos, expertos técnicos regionales e internacionales y sociedad civil en el marco de la Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia<sup>14</sup>. Se financiarán los gastos relacionados con el evento, que constituirá una plataforma de diálogo con el propósito de facilitar el intercambio de experiencias y de lecciones aprendidas en la región de ALC en cuanto a la implementación de políticas públicas de prevención y mitigación de contagios y mantenimiento del orden público en tiempos de esta pandemia.

III.4 Como resultado de esta intervención, se espera difundir prácticas promisorias en prevención y el intercambio de conocimiento sobre evaluaciones en materia de seguridad ciudadana y justicia en el marco de la Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia.

III.5 El costo total de la CT es de US\$200.000 que serán financiados por el Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones (INS) y de acuerdo con el siguiente cuadro de costos:

#### Presupuesto Indicativo

Actividad / Componente	Descripción	BID/Financiamiento por Fondo	Financiamiento Total
------------------------	-------------	------------------------------	----------------------

una valiosa red regional de expertos, para identificar y analizar temas regionales apremiantes y conectar a las partes interesadas. Adicionalmente, la Semana de Seguridad ha sido un instrumento estratégico para catalizar apoyos y conocimiento hacia los países en cooperaciones técnicas y préstamos del BID.

<sup>14</sup> Las áreas de diálogo, agenda temática y sede del evento, se definen tomando en consideración como criterios: (i) solicitud expresa por parte del país para ser el anfitrión de la Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia -el cual incluye la Clínica de Seguridad Ciudadana y Justicia y el Diálogo Regional de Política-; (ii) principales problemas que afectan al país y agenda del gobierno en curso para la prevención y control en materia de seguridad ciudadana y justicia; (iii) experiencias nacionales promisorias de interés común para la región.

<b>Componente 1:</b> Sistematización para identificar buenas prácticas para contribuir a contar con una seguridad y justicia más incluyente en la región de ALC	Sistematización sobre los efectos del COVID-19 desde el ámbito de seguridad y justicia en la región de ALC.	\$85.000	\$85.000
	Edición, puesta en maqueta y publicación de la sistematización.	\$25.000	\$25.000
	<b>Subtotal componente 1</b>	<b>\$110.000</b>	<b>\$110.000</b>
<b>Componente 2:</b> Difusión de conocimiento de experiencias en seguridad ciudadana y justicia	Expositores y expertos temáticos.	\$30.000	\$30.000
	Logística y publicación.	\$15.000	\$15.000
	Interpretación simultánea.	\$15.000	\$15.000
	Identidad visual, grabación del evento y material gráfico para la memoria del evento.	\$30.000	\$30.000
	<b>Subtotal componente 2</b>	<b>\$90.000</b>	<b>\$90.000</b>
<b>Total</b>		<b>\$200.000</b>	<b>\$200.000</b>

#### IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

IV.1 El Organismo Ejecutor (OE) de esta CT será el Banco a través de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (IFD/ICS) en estrecha coordinación con el gobierno sede del evento. El Banco ha sido seleccionado como OE por las siguientes razones: (i) se trata de una CT de investigación y difusión para profundizar el conocimiento a través de estudios para la sistematización de lecciones aprendidas en la última década en seguridad ciudadana y justicia, por tanto, la ejecución del BID mejoraría la independencia en el desarrollo de los estudios; (ii) el cumplimiento de los requisitos internos retrasaría la ejecución del CT, poniendo en riesgo el logro de sus objetivos; (iii) las clínicas de seguridad ciudadana y justicia forman parte de las iniciativas que el Banco viene desarrollando en estos temas; y (iv) el BID cuenta con experiencia de trabajo similares y puede vincular los hallazgos y productos de esta CT con sus proyectos y diversos escenarios de intercambio y capacitación.

IV.2 Las actividades a ejecutar bajo esta operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo) y serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco, a saber: (a) Contratación de consultores individuales, según lo establecido en las normas AM-650; (b) Contratación de firmas consultoras para servicios de naturaleza intelectual según la GN-2765-4 y sus guías operativas asociadas (OP-1155-4) y (c) Contratación de servicios logísticos y otros servicios distintos a consultoría, de acuerdo a la política GN-2303-28.

#### V. Riesgos importantes

V.1 Existe un riesgo potencial debido a la situación actual causada por el COVID-19 y, por tanto, en virtud de resguardarse ante las condiciones de salud pública, el evento presencial no pueda ser llevado a cabo. Para mitigar este riesgo, se convocará a todas las autoridades a participar en este evento en una plataforma virtual que disponga de interpretación simultánea y pueda albergar a la cantidad prevista de participantes, expertos, académicos y miembros de la sociedad civil. Se implementarán campañas en redes sociales.

- V.2 Adicionalmente, existe otro riesgo de que las autoridades de alto nivel convocadas no dispongan del tiempo para participar o asistan delegados sin posibilidad de influenciar directamente en la calidad e implementación de las políticas públicas de seguridad ciudadana y justicia. Para mitigar este riesgo, se implementará una comunicación efectiva, con avisos y monitoreo continuo para reservar la agenda de las altas autoridades con tiempo prudente de anticipación.

## **VI. Excepciones a las políticas del Banco**

- VI.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.

## **VII. Salvaguardias Ambientales**

- VII.1 No existen riesgos ambientales o sociales asociados con las actividades planteadas en esta operación de acuerdo con las “Environmental and Safeguards Compliance Guidelines” (OP-703), por lo cual la operación se clasifica como categoría “C” (Ver [Filtros de Salvaguardias](#)).

### **Anexos Requeridos:**

[Matriz de Resultados\\_34987.pdf](#)

[Términos de Referencia\\_53229.pdf](#)

[Plan de Adquisiciones\\_39086.pdf](#)